



**Tribunal Superior  
del Distrito Judicial de Cartagena  
Sala de Decisión Penal**

**Patricia Helena Corrales Hernández  
Magistrada Ponente  
Aprobado mediante Acta No. 189**

Cartagena de Indias, D. T. y C. dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

## **1. MOTIVO DEL PRONUNCIAMIENTO**

**1.1.** Resolver, en primera instancia, la acción de tutela promovida por **Ramón Pérez Betancur**, en nombre propio, contra **Orlando Díaz Atehortúa** y **Antonio Sierra Guardo**, magistrado y secretario de la **Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar**, respectivamente, por la presunta vulneración del derecho fundamental de petición y debido proceso.

## **2. ANTECEDENTES**

**2.1.** Manifestó el accionante que, el 25 de febrero de 2019, **Humberto Castillo Torres** interpuso queja disciplinaria en su contra, la cual fue asignada al magistrado **Orlando Díaz Atehortúa** bajo el radicado *13-001-11-102000-2019-00136-00*.

**2.1.1.** Apuntó que, el 21 de noviembre de 2022, se trasladó a una nueva vivienda junto con su familia en el municipio de Turbaco, Bolívar.

**2.1.2.** Dentro de ese trámite se adelantaron todas las etapas procesales correspondientes, por lo que, el 10 de marzo de 2023, se profirió sentencia sancionatoria en su contra. Sin embargo, solo se enteró de dicha decisión el 18 de mayo cuando se le informó del envío del expediente a la **Comisión Nacional de Disciplina judicial** en consulta, pues nunca fue notificado del fallo de primera instancia.

**2.1.3.** Por esa razón, el 19 de mayo, solicitó al secretario de la **Comisión Seccional de Disciplina Judicial** que proporcionara copia de la sentencia proferida por el doctor **Orlando Díaz Atehortúa**. No obstante, le contestó

Rad. Único. 13-001-22-04-000-2023-00251-00  
Rad. Interno. T1 No. 00248 de 2023  
Accionante: Ramón Pérez Betancur  
Accionado: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cartagena  
Debido proceso y acceso a la administración de justicia

que no podía enviar copias de lo pedido y que lo solicitara ante la **Comisión Nacional**.

**2.1.4.** Finalmente, señaló que la omisión en la que incurrieron los accionados impidió que ejerciera sus derechos de defensa y contradicción frente a la sentencia sancionatoria dictada en su contra.

**2.2.** Por lo anteriormente expuesto, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia. En consecuencia, se ordene a los accionados que decreten la nulidad del oficio de fecha 17 de mayo de 2023 y lo notifiquen de la sentencia proferida el 10 de marzo de 2023.

### **3. ACTUACIÓN PROCESAL**

**3.1.** A través de auto del 7 de junio de 2023, la Sala admitió la demanda, vinculó a las partes que intervienen dentro de la queja disciplinaria identificada con el radicado *13-001-11-02000-2019-00136-00* y a la **Comisión Nacional de Disciplina Judicial**, como terceros con interés, y solicitó informe sobre los hechos narrados por la parte accionante.

**3.2.** Al rendir informe, **Orlando Díaz Atehortúa**, magistrado de la **Comisión Seccional de Disciplina Judicial**, exteriorizó que, luego de adelantar todas las etapas procesales, el 10 de marzo de 2023, declaro responsable al disciplinado, hoy accionante. En consecuencia, le impuso sanción de suspensión por el término de 6 meses y lo remitió a la Secretaría para que cumpliera con su labor.

**3.2.1.** Aseveró que *“solo hasta la presente calenda, es que el suscrito se entera de la nueva dirección, ya que como bien puede denotarse con el proceso como de la vigencia expedida en la fecha, las direcciones que registra en la Unidad del Registro Nacional de Abogados es que tanto su residencia y oficina obran en el CONJ. MIRADOR DE ZARAGOCILLA BLOQUE H TORRE 4 APTO 401, y correo electrónico RAPEBET\_ABOGADO@HOTMAIL.COM , así las cosas, se reitera que no se tenía conocimiento de la nueva dirección que refiere el doctor RAMON PEREZ BETANCUR”*.

**3.3.** Por su parte, **Antonio Sierra Guardo**, secretario de la **Comisión Seccional de Disciplina Judicial**, indicó que, el 17 de abril de 2023, a través de correo electrónico, notificó al accionante la sentencia sancionatoria proferida el 10 de marzo de este mismo año. No obstante, el mensaje de datos rebotó con la siguiente leyenda *“El buzón de correo del destinatario está lleno y no puede aceptar mensajes por el momento”*, razón por la cual se procedió a enviar mediante planilla No. 069 de fecha 17 de abril de 2023, el Oficio SGD-203-5318-2023 al domicilio del encartado como forma de notificación personal”. De igual manera, el 2 de mayo, se notificó de manera supletoria mediante fijación de edicto en la página web de esa corporación.

**3.3.1.** También manifestó que, al no ser apelada la decisión y en cumplimiento de lo consagrado en el parágrafo 1° del artículo 112 de la ley 270 de 1996, el 17 de mayo de 2023, remitió el expediente a la **Comisión Nacional de Disciplina Judicial** para que se surtiera el grado jurisdiccional de consulta.

**3.3.2.** Finalmente, señaló que *“En cuanto a lo afirmado por el actor en el sentido de que el suscrito vulneró su derecho constitucional al negar la entrega de la solicitada copia de la providencia sancionatoria proferida en el proceso disciplinario N° 2019 - 136, es necesario manifestar que no existe ninguna irregularidad al respecto, puesto que la secretaria a mi cargo respondió frente a solicitado que por haber sido remitido el expediente a la Comisión Nacional de disciplina Judicial en grado de consulta, debía ser solicitada dicha pieza procesal directamente a nuestro superior, pues de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 112 la ley 270 de 1996, el Tribunal disciplinario de primera instancia pierde competencia, hasta tanto no sea resuelta la consulta y devuelto el expediente por el superior”*.

**3.4.** A su turno, la **Comisión Nacional de Disciplina Judicial** adujo que carecía de legitimación en la causa por pasiva, pues la queja del accionante está dirigida al actuar de la primera instancia. En consecuencia, solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional.

**3.4.1.** Por último, informó que, *“el día 06 de junio de 2023 recibió por reparto el proceso disciplinario radicado 13001-11-02-000-2019-00136-01, en contra del abogado Ramón Pérez Betancurt, para que se surta el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia sancionatoria proferida el 10 de marzo de 2023 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar. Proceso que será decidido de fondo de acuerdo con el orden de ingreso en su reparto, y una vez se emita la decisión de instancia la misma será notificada a los sujetos procesales”*.

**3.5.** Vencido el término otorgado por la Sala, ninguna otra parte rindió informe.

**3.6.** Luego, el 21 de junio de 2023, por una parte, la Sala declaró improcedente la acción de tutela por considerar que existía un proceso en curso. Por otro, amparó el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en su vertiente de postulación, de **Ramón Pérez Betancur**.

**3.7.** Inconforme con aquella decisión, la parte accionante interpuso recurso de impugnación. No obstante, al resolverlo, el 8 de agosto de 2023, la Sala de Decisión de Tutela No. 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decretó la nulidad de la sentencia proferida por esta Corporación, con la finalidad de que se notificara en debida forma a las partes que intervienen dentro de la queja disciplinaria identificada con el radicado 13-001-11-02000-2019- 00136-00, sin perjuicio de las pruebas e

informes aportados en primera oportunidad, y ordenó devolver el expediente digital.

**3.8.** En cumplimiento de lo resuelto por el superior, a través de auto fechado 8 de noviembre de 2023, la Sala dispuso admitir nuevamente el trámite constitucional y notificar en debida forma a los terceros con interés, lo cual se hizo efectivo el día 9 de este mismo mes y año<sup>1</sup>.

**3.9. Randy Sebastián Salcedo Sarmiento**, apoderado judicial de Humberto Castillo Torres, quejoso dentro del proceso disciplinario iniciado contra el accionante, indicó que *“en el Juzgado 2 Laboral de Pequeñas Causas de Cartagena, se accedieron a las excepciones de méritos formuladas por el suscrito apoderado (...) fue por esa razón que la judicatura antes mencionada, solamente ordenó el pago de aproximadamente \$463.000 mil pesos, y costas, cuando las pretensiones del hoy accionante era de aproximadamente varios millones de pesos, es decir, que El Juzgado Laboral que dirimió dicho conflicto, reconoció y dio por probado que efectivamente mi poderdante si le pagó al señor Ramon Pérez Betancur, en ese orden, se le condenó a pagar a mi poderdante dicha suma de dinero, porque no se tenía certeza de cuál era el monto pactado a título de honorarios profesionales entre el hoy accionante y mi poderdante”*.

**3.10.** Finalmente, **Orlando Díaz Atehortúa** y **Antonio Sierra Guardo**, magistrado y secretario de la **Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar**, insistieron en sus afirmaciones iniciales.

## 4. CONSIDERACIONES

**4.1.** Conforme a lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de 1991 y 1° del Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente para resolver, en primera instancia, la presente acción de tutela.

**4.2.** Teniendo en cuenta la situación fáctica y actuación procesal puesta de presente, en esta oportunidad le corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela es el mecanismo de defensa judicial al cual debe acudir **Ramón Pérez Betancur** para discutir lo ocurrido al interior de un proceso disciplinario.

**4.2.1.** En orden a dar solución al problema jurídico planteado, es preciso recordar que el principio de subsidiariedad, conforme al artículo 86 de la Constitución, implica que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

---

<sup>1</sup> Ver constancia de notificación que se encuentran anexas al documento denominado “30CONTESTACIÓN”.

**4.2.1.1.** Sobre el carácter subsidiario de la acción, la Corte Constitucional ha señalado que: “*permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos*”. Es ese reconocimiento el que obliga a los asociados a incoar los recursos jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación que estimen lesiva de sus derechos.

**4.2.1.2.** En otras palabras, las personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial adicional de protección.

**4.2.1.3.** No obstante, como ha sido reiterado por la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de subsidiariedad que rige la acción de tutela debe analizarse en cada caso concreto. Por ende, en aquellos eventos en que se cuenta con otros medios de defensa judicial, la Corte ha determinado que existen dos excepciones que justifican su procedibilidad: (i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las controversias no es **idóneo y eficaz** conforme a las especiales circunstancias del caso estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y, (ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, este no impide la ocurrencia de un **perjuicio irremediable**, caso en el cual la acción de tutela procede como **mecanismo transitorio**.

**4.3.** En el caso objeto de estudio, desde ya anuncia la Sala que la acción de tutela será **declarada improcedente**, pues no se satisfizo el requisito general de subsidiariedad, sea decir, “*que se hayan agotado todos los mecanismos -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada*”.

**4.3.1.** Lo anterior se dice por cuanto, como se vio, el expediente disciplinario fue enviado a la **Comisión Nacional de Disciplina Judicial** en consulta, conforme lo consagrado en el párrafo 1º, artículo 112 de la ley 270 de 1996<sup>2</sup>. Por ende, es al interior del trámite ordinario donde debe ventilarse todo lo concerniente a la presunta ausencia de notificación de la sentencia sancionatoria y las consecuencias que ello pueda generar, especialmente cuando, como lo anunció la entidad en mención al rendir informe, se encuentra en turno para ser decidido.

**4.3.1.1.** En ese orden de ideas, apúntese, **Ramón Pérez Betancur** aun cuenta con la oportunidad de exponer ante la **Comisión Nacional de Disciplina Judicial** la irregularidad alegada vía constitucional.

---

<sup>2</sup> PARÁGRAFO 1. Las sentencias u otras providencias que pongan fin de manera definitiva a los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia los Consejos Seccionales de la Judicatura y no fueren apeladas, serán consultadas cuando fueren desfavorables a los procesados.

**4.3.1.2.** Al respecto, la Corte Constitucional<sup>3</sup> ha indicado lo siguiente:

*“La acción de tutela es improcedente cuando se instaura contra procesos judiciales en curso.*

*En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que, cuando el proceso aún se encuentra en trámite, la intervención del juez constitucional está vedada toda vez que la acción de tutela no constituye -salvo que se esté ante la posible configuración de un perjuicio irremediable- un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser resueltos al interior del trámite ordinario. Incluso, cuando los procesos han culminado, se deben interponer y agotar los medios de defensa (i.e. recursos) que se encuentran previstos en el ordenamiento jurídico”.*

**4.3.1.3.** De no hacerse de esa manera, apúntese, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a aquellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

**4.3.1.4.** Además, **Ramón Pérez Betancur** no demostró que se encuentre ante la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente de manera excepcional este mecanismo constitucional, especialmente cuando al juez constitucional no le está permitido invadir la competencia de otros jueces so pretexto de proteger un derecho fundamental.

**4.3.1.5.** Conforme lo expuesto, la Sala **declarará improcedente** la demanda de tutela promovida por **Ramón Pérez Betancur**.

**4.3.2.** Por otra parte, advierte la Sala que, el 19 de mayo de 2023, **Ramón Pérez Betancur** solicitó copia de la sentencia sancionatoria proferida en su contra el 10 de marzo. No obstante, el día 24 de ese mismo mes y año, **Antonio Sierra Guardo**, secretario de la **Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar**, le informó al accionante que, en atención a que el expediente había sido remitido a la **Comisión Nacional de Disciplina Judicial** en consulta, debía elevar su solicitud de copias de la sentencia ante esa Corporación.

**4.3.2.1.** La anterior respuesta, antes que una contestación de fondo, a juicio de la Sala, constituye realmente una imposibilidad para resolver la solicitud prestacional pretendida por el accionante por falta de competencia, como lo señaló el accionado el rendir informe.

**4.3.1.2.** En ese contexto, apúntese, el secretario de la **Comisión Seccional de Disciplina Judicial**, -dentro de los 5 días siguientes al recibo- debió dar

---

<sup>3</sup> Sentencia T-335 de 2018.

Rad. Único. 13-001-22-04-000-2023-00251-00  
Rad. Interno. T1 No. 00248 de 2023  
Accionante: Ramón Pérez Betancur  
Accionado: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cartagena  
Debido proceso y acceso a la administración de justicia

traslado de lo pedido a la **Comisión Nacional de Disciplina Judicial**, conforme lo consagrado en el artículo 21 de la ley 1755 de 2015.

**4.3.1.3.** Si lo anterior es así, como efectivamente lo es, concluye la Sala que, **Antonio Sierra Guardo**, en su condición de secretario de la **Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar**, vulneró el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en su vertiente de postulación, de **Ramón Pérez Betancur**.

**4.3.1.4.** Así las cosas, se impone **conceder** el amparo constitucional invocado. En consecuencia, se **ordenará** a **Antonio Sierra Guardo**, secretario de la **Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar**, que, si aún no lo ha hecho, en el término de **48 horas**, contadas a partir de la notificación de esta decisión, remita a la **Comisión Nacional de Disciplina Judicial** la solicitud de copias radicada por **Ramón Pérez Betancur** el 19 de mayo de 2023 e informe al accionante dicho traslado.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

## **RESUELVE**

**PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE** la demanda de tutela promovida por **Ramón Pérez Betancur**.

**SEGUNDO: TUTELAR** el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en su vertiente de postulación, de **Ramón Pérez Betancur**.

**TERCERO: ORDENAR** a **Antonio Sierra Guardo**, secretario de la **Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar**, que, si aún no lo ha hecho, en el término de **48 horas**, contadas a partir de la notificación de esta decisión, remita a la **Comisión Nacional de Disciplina Judicial** la solicitud de copias radicada por **Ramón Pérez Betancur** el 19 de mayo de 2023 e informe al accionante dicho traslado.

**CUARTO: ADVERTIR** que contra esta decisión podrá interponerse impugnación, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, *dentro de los tres días siguientes a la notificación del fallo*.

**QUINTO:** De no ser impugnado en el término indicado, **REMÍTASE** al día siguiente la presente actuación a la H. Corte Constitucional, para su eventual revisión, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 31.2 del Decreto 2591 de 1991.

Rad. Único. 13-001-22-04-000-2023-00251-00  
Rad. Interno. T1 No. 00248 de 2023  
Accionante: Ramón Pérez Betancur  
Accionado: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cartagena  
Debido proceso y acceso a la administración de justicia

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**



**PATRICIA HELENA CORRALES HERNÁNDEZ**  
**MAGISTRADA**



**JOSÉ DE JESÚS CUMPLIDO MONTIEL**  
**MAGISTRADO**



**FRANCISCO ANTONIO PASCUALES HERNÁNDEZ**  
**MAGISTRADO**

**LEONARDO DE JESÚS LARIOS NAVARRO**  
**SECRETARIO**